



**Proceso selectivo por el turno de acceso libre,
para el ingreso en el cuerpo superior de la
Administración general de la Comunidad
Autónoma de Galicia, subgrupo A1.**

Primer ejercicio

Acceso: libre

Idioma: castellano

**NO abra el examen hasta que el tribunal se lo
indique**



XUNTA
DE GALICIA

CONSELLERÍA DE
FACENDA E
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



PRIMERA PARTE

1.- De acuerdo con el artículo 53.2 de la Constitución Española, qué derechos o libertades son susceptibles de protección a través del recurso de amparo:

- a) La propiedad privada.
- b) La objeción de conciencia.
- c) El derecho a una vivienda digna y adecuada.
- d) La negociación colectiva laboral.

2.- De acuerdo con la Constitución Española, deberá ser democráticas la estructura y funcionamiento de las siguientes organizaciones sociales:

- a) Asociaciones y sindicatos.
- b) Partidos políticos y fundaciones.
- c) Colegios profesionales y organizaciones profesionales.
- d) Todas las anteriores son falsas.

3.- Conforme al artículo 134 de la Constitución Española, la Ley de Presupuestos Generales del Estado:

- a) Puede crear tributos.
- b) No puede crear tributos.
- c) Puede crear tributos en caso de urgente necesidad.
- d) Todas las anteriores son falsas.

4.- Según el artículo 116 de la Constitución Española, el estado de excepción:

- a) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dándole cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto.
- b) Será declarado por el Congreso de los Diputados y su autorización y proclamación determinará expresamente sus efectos, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de tres meses.
- c) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados.
- d) Será declarado por el Congreso de los Diputados y su autorización y proclamación determinará expresamente sus efectos, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de tres meses, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

5.- Según el artículo 81 de la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, las personas físicas o jurídicas cuyo interés les legitime para comparecer en los procesos constitucionales, como actores o coadyuvantes:

- a) Deberán actuar bajo la representación y dirección de Letrado. Podrán comparecer por sí mismas, para defender derechos o intereses propios, las personas que tengan título de Licenciado en Derecho, que ejerzan la profesión de Abogado
- b) Podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas por un letrado. Podrán, con todo, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.
- c) Deberán actuar bajo la dirección de Letrado. Podrán conferir su representación a un Procurador.
- d) Deberán conferir su representación a un Procurador y actuar bajo la dirección de Letrado. Podrán comparecer por sí mismas, para defender derechos o intereses propios, las personas que tengan título de Licenciado en Derecho, aunque no ejerzan la profesión de Procurador o de Abogado.

6.- En atención a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, puede promover el recurso de inconstitucionalidad:

- a) El Presidente del Consejo de Gobierno de cualquiera de las Comunidades Autónomas.
- b) La Asamblea Legislativa de cualquiera de las Comunidades Autónomas, contra los actos con fuerza de ley procedentes de otra Comunidad Autónoma.
- c) El Defensor del Pueblo.
- d) Todas las alternativas son ciertas.

7.- Conforme a la Ley orgánica 2/1979 de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional para que la cuestión de inconstitucionalidad pueda ser interpuesta por jueces o magistrados es preciso:

- a) Que la norma tenga rango de ley orgánica.
- b) Que la norma, a criterio del órgano judicial, sea o no aplicable al caso vulnere la Constitución.
- c) Que de la validez de tal norma dependa el fallo.
- d) Todas las alternativas son correctas.

8.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley orgánica 2/1979, del 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, la designación para el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional se hará por:

- a) Seis años, renovándose el Tribunal por terceras partes cada tres.
- b) Nueve años, renovándose el Tribunal por quintas partes cada cinco.



- c) Nueve años, renovándose el Tribunal por quintas partes cada tres.
- d) Nueve años, renovándose el Tribunal por terceras partes cada tres.

9.- Según el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo podrá solicitar a los poderes públicos todos los documentos que considere necesarios para el desarrollo de su función:

- a) Incluidos aquéllos clasificados con el carácter de secretos de acuerdo con la ley. En este último supuesto la no remisión de dichos documentos deberá ser acordada por el Consejo de Ministros y se acompañará una certificación acreditativa del acuerdo denegatorio.
- b) Incluidos aquéllos clasificados con el carácter de reservado de acuerdo con la ley. En este último supuesto la remisión de dichos documentos deberá ser acordada por el Consejo de Ministros y se acompañará una certificación acreditativa del acuerdo.
- c) Incluidos aquéllos clasificados con el carácter de reservado de acuerdo con la ley. En este último supuesto la remisión de dichos documentos deberá ser acordada por las Cortes Generales y se acompañará una certificación acreditativa del acuerdo.
- d) Incluidos aquéllos clasificados con el carácter de secretos de acuerdo con la ley. En este último supuesto la no remisión de dichos documentos deberá ser acordada por el Congreso de los Diputados y se acompañará una certificación acreditativa del acuerdo denegatorio.

10.- A quién corresponde acreditar con sus firmas el nombramiento del Defensor del Pueblo según el artículo 4 de la Ley orgánica 3/1981, del 6 de abril, del Defensor del Pueblo:

- a) Al Presidente del Congreso y se publicará en el Boletín oficial del Estado.
- b) Al Presidente del Gobierno y se publicará en el Boletín oficial del Estado.
- c) Al Presidente del Congreso y del Senado conjuntamente, y se publicará en el Boletín oficial del Estado.
- d) Al Presidente del Senado, y se publicará en el Boletín oficial del Estado.

11. Conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo, las personas que se encuentran al servicio del Defensor del Pueblo mientras permanezcan en el mismo se considerarán:

- a) Personal al servicio personal del Defensor del Pueblo.
- b) Personal al servicio de las Cortes.
- c) Personal al servicio del Congreso de los Diputados.
- d) Personal al servicio del Senado.

12. Conforme al artículo 36 de la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo, los adjuntos del Defensor del Pueblo cesarán:

- a) Automáticamente a los cuatro años de su elección.
- b) Automáticamente cuando cese el Defensor del Pueblo que los nombró.
- c) Automáticamente cuando tome posesión un nuevo Defensor del pueblo.
- d) Automáticamente cuando se publique el cese del Defensor del Pueblo que les nombró.

13.- Los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones del Tribunal de Cuentas serán resueltos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley orgánica 32/1982, del 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas:

- a) A las Cortes Generales.
- b) Al Tribunal Supremo.
- c) Al Tribunal Constitucional.
- d) Al Presidente del Tribunal de Cuentas.

14.- Según el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas:

- a) Depende orgánicamente del Fiscal general del Estado y quedará integrada por el Fiscal y los Consejeros de Cuentas.
- b) Depende orgánicamente del Fiscal general del Estado y quedará integrada por el Fiscal y los Delegados instructores.
- c) Depende funcionalmente del Fiscal general del Estado y quedará integrada por el Fiscal y los Consejeros de Cuentas Presidentes de Sección.
- d) Depende funcionalmente del Fiscal general del Estado y quedará integrada por el Fiscal y los Abogados Fiscales.

15.- De acuerdo con el artículo 17 de la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, cuál de las siguientes afirmaciones respecto de la jurisdicción contable no es correcta:

- a) La jurisdicción contable es necesaria e improrrogable.
- b) La jurisdicción contable es exclusiva y plena.
- c) La jurisdicción contable es incompatible con la jurisdicción penal, debiendo suspender el curso de las actuaciones en tanto no termine el correspondiente proceso penal.
- d) La decisión que se produzca en el ámbito de la jurisdicción contable no producirá efectos fuera de aquella.

16.- Según el artículo 23 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de organización, competencia y funcionamiento del Gobierno, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta:

- a) Preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación.
- b) Preverán el comienzo de su vigencia a los veinte días de su publicación.
- c) Preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 2 de julio siguientes a su aprobación.
- d) Preverán el comienzo de su vigencia el 1 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación.

17.- Según el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de organización, competencia y funcionamiento del Gobierno, cuando se eleve para su aprobación por el órgano competente una propuesta normativa que no figurara en el Plan Anual Normativo:

- a) No será preciso el trámite de consulta pública previsto en el artículo 26.2, sin perjuicio de la realización de los trámites de audiencia pública o de información pública sobre el texto a los que se refiere el artículo 26.6, cuyo plazo de realización será de siete días.
- b) Será necesario justificar este hecho en la correspondiente Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
- c) Se recabará la opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas acerca de esta circunstancia en la consulta pública a través del portal web del departamento competente.
- d) Los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración, establecidos en esta o en otra norma, se reducirán a la mitad de su duración.

18.- Conforme a la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, de organización, competencia y funcionamiento del Gobierno, el Consejo de Ministros aprobará un uniforme anual en el que se refleje el grado de cumplimiento del plan anual normativo del año anterior:

- a) Antes del 30 de abril de cada año.
- b) Antes del 1 de abril de cada año.
- c) Antes del 31 de marzo de cada año.
- d) Antes del 31 de diciembre de cada año.

19.- La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará integrada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 50/1997, del 27 de noviembre, de organización, competencia y funcionamiento del Gobierno:

- a) Por el Presidente del Gobierno y los titulares de las Secretarías de Estado y los Subsecretarios de los distintos departamentos ministeriales.
- b) Por los titulares de las Secretarías de Estado y los Subsecretarios de los distintos departamentos ministeriales.
- c) Por los titulares de las Secretarías de Estado de los distintos departamentos ministeriales y los Subsecretarios del Ministerio de Presidencia, Justicia y Hacienda
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

20.- Conforme al Estatuto de Autonomía de Galicia y en el ámbito de la Administración de justicia:

- a) El conocimiento del idioma gallego es un mérito preferente a efectos de concursos y traslados, salvo para Magistrados y Jueces.
- b) El conocimiento del derecho civil gallego es un mérito preferente a efectos de concursos y oposiciones solo para los funcionarios de la Administración de Justicia.
- c) La especialización en el derecho gallego es mérito preferente en concursos y oposiciones de Magistrados, Jueces, Letrados de la Administración de Justicia y Fiscales.
- d) El conocimiento del idioma del país será mérito preferente en concursos y oposiciones para proveer puestos de Magistrados, Jueces, Letrados de la Administración de Justicia, Fiscales y todos los funcionarios de la Administración de justicia.

21.- La Comunidad Autónoma de Galicia, conforme a su Estatuto de Autonomía, tiene competencia exclusiva en las siguientes materias:

- a) Sanidad Interior.
- b) La pesca en las rías y demás aguas interiores.
- c) Régimen de Radiodifusión y Televisión.
- d) Productos farmacéuticos.

22.- Según el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Galicia, en el marco del presente Estatuto, en materia de asistencia social:

- a) Corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la ejecución de la legislación del Estado.
- b) Corresponde a la Comunidad Autónoma gallega el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación del Estado en los términos que la misma establezca

- c) Corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva.
- d) Corresponde a la Comunidad Autónoma gallega de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general del Estado.

23.- Según el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Galicia, corresponde a la Comunidad Autónoma la defensa y promoción de los valores culturales del pueblo gallego. A tal fin, y mediante ley del Parlamento, se constituirá:

- a) Un Fondo Cultural Gallego y el Consejo de la Cultura Gallega.
- b) El Consejo de la Cultura Gallega y la Real Academia Gallega.
- c) El Consejo de la Cultura Gallega y la Real Academia Gallega de Bellas Artes.
- d) El Consejo de la Cultura Gallega, la Real Academia Gallega y la Real Academia Gallega de Bellas Artes.

24.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del Estatuto de autonomía de Galicia, a quién corresponde ejercer todas las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado:

- a) Al Parlamento de Galicia
- b) Tribunal Superior de Justicia de Galicia
- c) A la Comunidad Autónoma
- d) Al Gobierno del Estado.

25. Conforme al Estatuto de Autonomía de Galicia, qué órgano solicitará al Estado la transferencia o delegación de competencias no asumidas en el Estatuto?:

- a) El Parlamento gallego.
- b) El presidente de la Xunta.
- c) El Consejo de Gobierno.
- d) Todas las alternativas son correctas.

26.- De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de la Xunta y de su Presidencia, este tiene derecho a:

- a) Utilizar la bandera de Galicia como guion.
- b) A utilizar la residencia oficial que se establezca, con la dotación de medios personales.
- c) A recibir el tratamiento de Excelentísimo Señor con carácter vitalicio.
- d) Todas las alternativas son ciertas.



27- Según el artículo 32 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de la Xunta y de su Presidencia, la Xunta se reúne en Consello, que someterá su funcionamiento a los principios de:

- a) Responsabilidad, solidaridad, legalidad y transparencia.
- b) Colegialidad, territorialidad, coordinación y descentralización.
- c) Unidad, solidaridad, legalidad y coordinación.
- d) Unidad, colegialidad, participación y coordinación.

28.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1/1983, del 22 de febrero, de la Xunta y de su Presidencia, las expresidentas y expresidentes tendrán derecho a percibir, durante dos años desde la fecha de su cese las compensaciones económicas que se establezcan por decreto de la Xunta de Galicia. Asimismo, tendrán derecho a los medios y servicios que se establezcan por decreto de la Xunta:

- a) Por un período de cuatro años adicionales, si tuvieron la condición de presidenta o presidente durante cuatro o menos años, o por un periodo de diez años si tuvieron la condición de presidenta o presidente durante más de cuatro años.
- b) Por un período de dos años adicionales, si tuvieron la condición de presidenta o presidente durante cuatro o menos años, o por un periodo de diez años si tuvieron la condición de presidenta o presidente durante más seis años.
- c) Por un período de tres años adicionales, si tuvieron la condición de presidenta o presidente durante cinco o menos años, o por un periodo de diez años si tuvieron la condición de presidenta o presidente durante más de cuatro años.
- d) Por un período de cuatro años adicionales, si tuvieron la condición de presidenta o presidente durante cuatro o menos años, o por un periodo de ocho años si tuvieron la condición de presidenta o presidente durante más de seis años.

29.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 1/1983, del 22 de febrero, de la Xunta y de su Presidencia, el Presidente elegido tomará posesión de su cargo:

- a) A partir de los cinco días siguientes al de la publicación de su nombramiento
- b) Dentro de los cinco días siguientes al de la publicación de su nombramiento.
- c) Dentro de los tres días siguientes al de la publicación de su nombramiento.
- d) A partir de los tres días siguientes al de la publicación de su nombramiento.

30.- Conforme al artículo 6 de la Ley 8/1985, de 13 de agosto, de elecciones al Parlamento de Galicia, el cargo de Diputado es compatible con el siguiente cargo:

- a) Alcalde.
- b) Valedor do Pobo.
- c) Senador elegido en representación de la Comunidad Autónoma.
- d) Los miembros del Consejo de Administración de la Corporación de Radiotelevisión de Galicia.

31.- Según el artículo 9 de la Ley 8/1985, de 13 de agosto de elecciones al Parlamento de Galicia:

- a) El número de Diputados del Parlamento de Galicia se fija en 65.
- b) A cada una de las cuatro provincias de Galicia le corresponde un mínimo inicial de 10 Diputados.
- c) Los 25 Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población.
- d) El Decreto de convocatoria debe especificar que corresponde a cada circunscripción un mínimo inicial de 12 Diputados.

32.- Según el artículo 25 de la Ley 8/1985, de 13 de agosto de elecciones al Parlamento de Galicia, la campaña electoral tendrá una duración:

- a) De quince días.
- b) De veintiún días.
- c) No inferior a quince días ni superior a veintiuno.
- d) No inferior a quince días ni superior a veinte.

33.- Conforme al artículo 15 de la Ley 8/1985 de 13 de agosto, de elecciones al Parlamento de Galicia, el secretario de la Junta Electoral de Galicia es:

- a) El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
- b) El Letrado mayor del Parlamento de Galicia.
- c) El Presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
- d) Todas las anteriores son falsas.

34.- Conforme a la Ley 6/1984 de 5 de junio, do Valedor do Pobo de Galicia, las normas reglamentarias dictadas por el Valedor do Pobo:

- a) Serán publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento de Galicia.
- b) El Valedor do Pobo no tiene competencia para dictar normas reglamentarias.
- c) Serán publicadas en el Diario Oficial de Galicia.
- d) No precisan publicidad.



35.- Según el artículo 18 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo de Galicia, en relación con la tramitación de las quejas:

- a) Será preceptiva la asistencia de Letrado y Procurador.
- b) Los particulares deberán ser asistidos por Letrado. Podrán conferir su representación a un Procurador.
- c) No será preceptiva la intervención o asistencia de Letrado ni Procurador.
- d) Los particulares deberán conferir su representación a un Procurador. Podrán actuar bajo la dirección de Letrado.

36.- Según el artículo 14 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo de Galicia, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) Los Diputados, individualmente, y las Comisiones del Parlamento de Galicia relacionadas con la defensa de los derechos y libertades públicas, podrán solicitar la intervención del Valedor do Pobo en todas las cuestiones atribuidas a su competencia.
- b) Las autoridades administrativas, en el ámbito de su competencia, podrán presentar quejas ante el Valedor do Pobo.
- c) La Comisión de Peticiones podrá además transmitirle las que reciba en los términos del artículo 48 del Reglamento del Parlamento Gallego.
- d) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo podrá dirigirse al Valedor do Pobo sin restricción ni limitación alguna.

37.- Según el artículo 3 de la Ley 6/1984, del 5 de junio del Valedor do Pobo de Galicia:

- a) El Valedor do Pobo tomará posesión de su cargo ante la Mesa del Parlamento, dentro de los quince días siguientes a la publicación de su nombramiento.
- b) El Valedor do Pobo tomará posesión de su cargo ante el Pleno del Parlamento, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de su nombramiento.
- c) El Valedor do Pobo tomará posesión de su cargo ante la Mesa del Parlamento, a partir de los quince días siguientes a la publicación de su nombramiento.
- d) El Valedor do Pobo tomará posesión de su cargo ante el Pleno del Parlamento, dentro de los quince días siguientes a la publicación de su nombramiento.

38.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consello Consultivo de Galicia, los informes:

- a) Se publicarán transcurrido un mes desde su aprobación, excepto cuando la Administración que formule la consulta solicite expresamente que no sean objeto de publicación.
- b) Se publicarán transcurrido un mes desde su aprobación, cuando así lo acuerde por mayoría la Sección de Estudios e Informes.

- c) Se publicarán transcurrido un mes desde su aprobación, cuando así lo acuerde por unanimidad la Sección de Estudios e Informes.
- d) No podrán ser objeto de publicación, salvo en los casos previstos en la normativa en materia de transparencia.

39.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consello Consultivo de Galicia, este órgano dictaminará en los siguientes casos:

- a) Anteproyectos de ley elaborados por el Consello de la Xunta, con carácter facultativo.
- b) Conflictos de atribuciones que se planteen entre diversas consellerías, entre la Administración general de la Comunidad Autónoma y otras administraciones públicas de Galicia o entre las entidades locales de Galicia, con carácter preceptivo.
- c) Convenios y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas, con carácter facultativo.
- d) Modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico regulados por ley, cuando tuvieran por objeto una diferente zonificación en el uso urbanístico del suelo rústico especial, en los espacios libres y las zonas verdes destinados a dominio público del plan, con carácter preceptivo.

40.- Según el artículo 4 de la Ley 3/2014, del 24 de abril del Consello Consultivo de Galicia, las consejeras y consejeros electivos:

- a) Ejercerán su mandato por un período de seis años, salvo remoción por las causas previstas en esta ley y tendrán como límite máximo de permanencia en sus cargos la edad de setenta y dos años.
- b) Ejercerán su mandato por un período de cinco años, salvo remoción por las causas previstas en esta ley y tendrán como límite máximo de permanencia en sus cargos la edad de setenta y cinco años
- c) Ejercerán su mandato por un período de cinco años, y tendrán como límite máximo de permanencia en sus cargos la edad de setenta y dos años
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

41.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia, los asuntos sobre los cuales haya dictaminado el Consejo Consultivo de Galicia:

- a) Deberán dictarse de acuerdo con el dictamen preceptivo del Consello Consultivo y contendrán la fórmula "de acuerdo con el Consello Consultivo". Los dictámenes facultativos no serán vinculantes.
- b) Deberán dictarse de acuerdo con el dictamen del Consello Consultivo.

- c) Serán nulos de pleno derecho cuando se aparten del dictamen del Consello Consultivo.
- d) No podrán ser sometidos por el órgano consultante a dictamen posterior de otro órgano o institución consultiva.

42.- Conforme a la Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística, qué afirmación es correcta:

- a) Corresponde a la Xunta de Galicia la determinación de los nombres oficiales de los municipios, de los territorios, de los núcleos de población y vías urbanas.
- b) El gallego será la lengua usual en las emisoras de radio y televisión en Galicia.
- c) La Xunta está obligada a fomentar, entre otros, el doblaje y la subtitulación en lengua gallega.
- d) En los centros de educación especial para alumnos con deficiencias físicas o mentales para el aprendizaje, se empleará igualmente el gallego como lengua vehicular.

43.- Conforme a lo dispuesto en 2 de la Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística, los poderes públicos de Galicia:

- a) Garantizarán el uso normal del gallego y del castellano, lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma.
- b) Garantizarán el uso normal del gallego como lengua oficial de Galicia y del castellano como lengua oficial del Estado.
- c) Garantizarán el uso normal del gallego como lengua oficial de las instituciones de la Comunidad Autónoma y promoverán el uso del gallego en la Administración Local.
- d) Garantizarán el uso normal del gallego como lengua propia y del castellano, como lengua oficial.

44.- Conforme al artículo 8.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocerán en única o primera instancia de las siguientes materias:

- a) Una sanción de cese de actividad por seis meses.
- b) Una reclamación por responsabilidad patrimonial de 60.000 euros.
- c) Multa superior a 60.000 euros.
- d) Nacimiento de la relación de servicio de los funcionarios de carrera.

45.- El plazo para evacuar las conclusiones, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, en el procedimiento ordinario es:

- a) De veinte días sucesivos.
- b) De diez días sucesivos.



- c) De diez días simultáneos.
- d) De quince días simultáneos.

46.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos, entidades todas ellas aptas para ser titulares de derechos y obligaciones al margen de su integración en las estructuras formales de las personas jurídicas:

- a) También tendrán capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
- b) También tendrán capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo cuando la Ley así lo declare expresamente.
- c) No tendrán capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
- d) No tendrán capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo excepto cuando la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

47. Conforme a la Ley 29/1988 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, de las resoluciones que acuerdan la inadmisión de las peticiones de asilo político conocerán en primera instancia:

- a) Las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunales Superiores de Justicia.
- b) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
- c) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
- d) La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

48. Señale cuál de las siguientes funciones no corresponde al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, según la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas:

- a) Resolver los conflictos que se susciten en la aplicación de los puntos de conexión de los tributos.
- b) La coordinación de la política de endeudamiento.
- c) La coordinación de la política presupuestaria de las Comunidades Autónomas con la del Estado.
- d) La coordinación de la política de inversiones públicas.

49.- Las Comunidades Autónomas podrán ejercer competencias normativas, según del artículo 19 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas:

- a) En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la fijación de los supuestos de aplicación del régimen de estimación objetiva, la cuantía del mínimo personal y familiar y la regulación de la tarifa.
- b) En el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la co-incineración de residuos, la regulación de los tipos impositivos y de la gestión del tributo.
- c) En el Impuesto sobre el Patrimonio, el establecimiento de las reglas de valoración de bienes en la base imponible, la determinación de mínimo exento, la tarifa y bonificaciones.
- d) En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la creación de exenciones, de reducciones de la base imponible, la tarifa, las deducciones y bonificaciones, así como la regulación de la gestión.

50. Según la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, ¿sobre cuál de los siguientes tributos estatales podrá establecerse un recargo autonómico?:

- a) El Impuesto sobre Sociedades.
- b) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- c) El Impuesto sobre Hidrocarburos.
- d) El Impuesto sobre el Valor Añadido.

SEGUNDA PARTE

51.- Las bases de la subvención deberán tener el siguiente contenido de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia:

- a) Indicación de órganos competentes para la instrucción y resolución.
- b) Indicación de los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención.
- c) Medio de notificación o publicación.
- d) Todas las alternativas son ciertas.

52.- Según el artículo 16 de la ley 9/2007, del 13 de enero, de subvenciones de Galicia en los artículos 44 e 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2006 se creó:

- a) El Registro de ayudas, subvenciones y Convenios.
- b) El Registro de ayudas, subvenciones y Convenios, y el de Sanciones.

- c) El Registro de subvenciones.
- d) El Registro de ayudas, subvenciones.

53.- Según el artículo 20 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en los procedimientos de concesión en régimen de concurrencia competitiva, la presentación de la solicitud de concesión de subvención por el interesado:

- a) Conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones que deban emitirla Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la consejería competente en materia de economía y hacienda de la Xunta de Galicia, cuando no hayan transcurrido más de dos años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
- b) Se acompañará de una declaración responsable en sustitución de las certificaciones que deban emitir la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la consejería competente en materia de economía y hacienda de la Xunta de Galicia.
- c) Se acompañará de las certificaciones que deban emitir la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la consejería competente en materia de economía y hacienda de la Xunta de Galicia.
- d) Conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones que deban emitirla Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la consejería competente en materia de economía y hacienda de la Xunta de Galicia, cuando así se prevea en las bases reguladoras.

54.- Según el artículo 21 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, la instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde:

- a) Al órgano que se indique en la convocatoria.
- b) Al órgano competente para aprobar la convocatoria.
- c) Al órgano competente para resolver la convocatoria.
- d) Al órgano competente para comprobar la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

55.- Según el artículo 32 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, son causas de nulidad de la resolución de concesión:

- a) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se consiguen los objetivos, se realiza la actividad, se ejecuta el proyecto o se adopta el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.



b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia.

c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 11 y 12 de la presente ley, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o entes públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 3 del artículo 15 de la presente ley.

56.- Según el artículo 49 de la ley 9/2007, del 13 de enero, de subvenciones de Galicia, cuando en el informe emitido por la Intervención General de la Comunidad Autónoma se recoja la procedencia de reintegrar la totalidad o parte de la subvención, el órgano gestor deberá comunicar a la Intervención General de la Comunidad Autónoma en el plazo de:

a) Dos meses a partir de la recepción del informe de control financiero la incoación del expediente de reintegro o la discrepancia con su incoación.

b) Quince días a partir de la recepción del informe de control financiero la incoación del expediente de reintegro o la discrepancia con su incoación.

c) Un mes a partir de la recepción del informe de control financiero la incoación del expediente de reintegro o la discrepancia con su incoación.

d) No es necesaria comunicación a la Intervención General.

57.- Según el artículo 52 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, las acciones u omisiones tipificadas en la presente ley no darán lugar a responsabilidad por infracción administrativa en materia de subvenciones en los siguientes supuestos:

a) Cuando se realicen por las entidades colaboradoras.

b) Cuando se realicen por las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación obligadas a prestar colaboración y a facilitar cuanta documentación sea requerida en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 de la presente ley.

c) Cuando se deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en la que se tomó aquella.

d) Cuando se realicen por el representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar.

58.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la ley 9/2007, del 13 de enero, de subvenciones de Galicia, la comisión repetida de infracciones en materia de subvenciones se entiende producida cuando el infractor fuera sancionado por una infracción de la misma naturaleza, grave o muy grave, en virtud de resolución firme dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción. Cuando concorra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave o muy grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementará:

- a) En 10 puntos porcentuales por cada infracción anteriormente sancionada, hasta un máximo de 75.
- b) En 10 puntos porcentuales por cada infracción anteriormente sancionada, hasta un máximo de 70.
- c) En 10 puntos porcentuales por cada infracción anteriormente sancionada, hasta un máximo de 50.
- d) En 20 puntos porcentuales por cada infracción anteriormente sancionada, hasta un máximo de 60.

59.- Conforme al artículo 23 de la Ley 9/2007 de 13 de enero, de subvenciones de Galicia, el plazo máximo para resolver y notificar la concesión de subvenciones no podrá sobrepasar, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo máximo o así venga previsto por la normativa de la Unión Europea, de:

- a) Nueve meses.
- b) Tres meses.
- c) Cuatro meses.
- d) Seis meses.

60.- No se entenderán incluidos en el patrimonio de la Comunidad Autónoma, a los solos efectos de la Ley 5/2011 del 30 de setiembre, de patrimonio de la Comunidad Autónoma gallega, según su artículo 2:

- a) Los derechos de arrendamiento.
- b) El dinero y demás recursos financieros de la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
- c) Los derechos de propiedad incorporea
- d) Los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles.



61.- Conforme al artículo 9 de la Ley 5/2011 del 30 de setiembre, de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia, los bienes y derechos afectados al cumplimiento de los fines o servicios de las consellerías y entidades públicas instrumentales pueden ser objeto de una o varias afectaciones secundarias, siempre que los diversos fines concurrentes fuesen compatibles entre sí. Por quién se acordará la afectación secundaria:

- a) Por la persona titular de la consellería competente en materia de patrimonio mediante orden.
- b) Por la persona titular de la consellería competente en materia de patrimonio mediante Decreto.
- c) Por la persona titular de la consellería competente en materia de patrimonio conjuntamente con la consellería interesada en la afectación secundaria.
- d) Por el Consello de la Xunta de Galicia.

62.- De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 5/2011 del 30 de setiembre, de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia puede acordarse la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia por adjudicación directa en los siguientes supuestos. Señale la incorrecta:

- a) Cuando el adquirente fuese una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública o interés social.
- b) Cuando por razones excepcionales se estimase conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble.
- c) Cuando el valor de tasación del bien no excediese de 5.000 euros y se incorporasen tres ofertas al procedimiento siempre que sea posible.
- d) Cuando la venta se efectuase a favor de quien ostente un derecho de adquisición preferente reconocido por disposición legal.

63.- Conforme al artículo 56 de la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con las adquisiciones a título gratuito:

- a) Corresponderá a la persona titular de la consejería competente en materia de patrimonio aceptar las herencias testadas, legados y donaciones a favor de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, salvo que la Ley establezca otra cosa.
- b) Corresponderá a la persona titular de la consejería competente en materia de patrimonio aceptar las herencias intestadas deferidas a favor de la Comunidad Autónoma de Galicia.



c) Las donaciones de bienes muebles en que la persona donante hubiera señalado el fin a que hayan de destinarse las mismas serán aceptadas por el titular de la consejería competente en materia de patrimonio.

d) Corresponderá a la persona titular de la consejería competente en materia de patrimonio aceptar las disposiciones a título gratuito a favor de las entidades públicas instrumentales.

64. Conforme a la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, de patrimonio de la Comunidad autónoma de Galicia, el órgano competente para enajenar bienes o derechos de la comunidad puede admitir el pago aplazado del precio de venta por un período:

- a) No superior a diez años.
- b) No superior a doce años.
- c) No superior a catorce años.
- d) No superior a quince años.

65. Conforme a la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, de patrimonio de la Comunidad autónoma de Galicia, para que pueda autorizarse la permuta de bienes y derechos del patrimonio de la comunidad autónoma, la diferencia de valor entre los bienes o derechos que se trate de permutar, según tasación, no será superior a:

- a) El 50% del que tenga mayor.
- b) El 40% del que tenga mayor.
- c) El 30% del que tenga mayor.
- d) El 10% del que tenga mayor.

66. Conforme a la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, de patrimonio de la Comunidad autónoma de Galicia, el plazo de otorgamiento de las concesiones demaniales incluidas las prórrogas no puede exceder de:

- a) Noventa y nueve años.
- b) Cincuenta años.
- c) Veinticinco años.
- d) Setenta y cinco años.

67.- Según el artículo 37 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, que regula el ejercicio de la potestad reglamentaria:

- a) Las personas titulares de las consellerías no podrán dictar disposiciones administrativas de carácter general.

- b) Se considerarán disposiciones dictadas en el ejercicio de la potestad reglamentaria las órdenes emitidas por las entidades instrumentales públicas
- c) Corresponde a la Xunta de Galicia la titularidad y el ejercicio de la potestad reglamentaria de la Comunidad Autónoma.
- d) Corresponde a la Xunta de Galicia, a las personas titulares de las consellerías y a las entidades locales la titularidad y el ejercicio de la potestad reglamentaria de la Comunidad Autónoma.

68.- Según el artículo 44 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, los reglamentos autonómicos entrarán en vigor:

- a) El 2 de enero o el 2 de julio siguientes a su aprobación.
- b) El 2 de enero o el 2 de julio siguientes a su aprobación salvo que en ellos se disponga otra cosa.
- c) A los veinte días hábiles de su publicación salvo que en ellos se disponga otra cosa.
- d) A los veinte días naturales de su publicación salvo que en ellos se disponga otra cosa.

69.- Según el artículo 95 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, los consorcios autonómicos:

- a) Son entidades instrumentales de la Administración general de la Comunidad Autónoma dotadas de personalidad jurídica propia, que sujetan su actividad a las normas que rigen la organización, funcionamiento y actuación de las administraciones públicas, así como a lo establecido en su convenio de creación y en su estatuto.
- b) Son entidades instrumentales de la Administración general de la Comunidad Autónoma dotadas de personalidad jurídica propia, que sujetan su actividad a las normas que rigen la organización, funcionamiento y actuación de las administraciones públicas, así como a lo establecido en el decreto de creación y en su estatuto.
- c) Se crean por orden de la consejería de adscripción, que determinará sus fines, así como las particularidades del régimen orgánico, funcional y financiero. En todo caso, en los órganos de que se dote el consorcio deberá garantizarse la presencia mayoritaria del sector público.
- d) Se constituyen por ley, que determinará la consejería de adscripción, sus fines, así como las particularidades del régimen orgánico, funcional y financiero. En todo caso, en los órganos de que se dote el consorcio deberá garantizarse la presencia mayoritaria del sector público.



70.- En el caso de órganos colegiados y conforme a lo previsto en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia:

- a) En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el presidente será sustituido por el vicepresidente, si lo hubiere, y, en su falta, por el miembro del órgano colegiado de mayor antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes.
- b) El presidente dirime, en cualquier caso, los debates con su voto.
- c) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado.
- d) Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas contado desde el momento en que el presidente dé por finalizada la sesión, que se incorporará al texto aprobado.

71.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 16/2010, del 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración General y del sector público autonómico de Galicia, las indemnizaciones máximas que por asistencia pueden corresponder a los integrantes de los órganos superiores de dirección de las entidades instrumentales del sector público serán fijadas:

- a) Por Decreto.
- b) Por Acuerdo del Consello de la Xunta.
- c) Por Orden.
- d) Por la entidad instrumental.

72.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 16/2010, del 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración General y del sector público autonómico de Galicia, cuál de las siguientes no es una entidad pública instrumental:

- a) Agencias públicas instrumentales.
- b) Consorcios autonómicos.
- c) Sociedades mercantiles públicas autonómicas.
- d) Todas las anteriores son entidades públicas instrumentales.

73.- Conforme al artículo 1 de la Ley 16/2010 de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, en el objeto de la ley se recoge:

- a) La regulación del ejercicio de la potestad reglamentaria y del procedimiento de elaboración de reglamentos.
- b) La regulación del ejercicio de la potestad sancionadora.

- c) La regulación de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
- d) La regulación de la transparencia.

74.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto Legislativo 1/1999, del 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, la deuda y demás operaciones de crédito concertadas por la Comunidad o por sus organismos autónomos por plazo superior a un año se destinarán exclusivamente a la financiación de gastos de capital. La cuantía de las anualidades de amortización, incluido capital e intereses, no podrá exceder del:

- a) 15 % de los ingresos corrientes previstos en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma en cada año.
- b) 25 % de los ingresos corrientes previstos en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma en cada año.
- c) 15 % de los ingresos corrientes previstos en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma en el año que se concierta y en el siguiente.
- d) 25 % de los ingresos corrientes previstos en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma en el año que se concierta y en el siguiente.

75.- El artículo 55 bis del Decreto Legislativo 1/1999, del 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, El Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria, se dotará por importe conjunto del:

- a) 2% del total de los recursos propios.
- b) 5% del total de los recursos propios para operaciones no financieras.
- c) 5% del total de los recursos propios.
- d) 2% del total de los recursos propios para operaciones no financieras.

76.- Según el artículo 6 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia, en el marco de las materias reguladas en esta Ley, la determinación de las directrices básicas de política económica y financiera, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Galicia:

- a) Se regulará por Ley del Parlamento de Galicia.
- b) Será competencia del Consello de la Xunta.
- c) Será competencia de la Consellería de Economía y Hacienda.
- d) Corresponde a la Consellería con competencias en materia de Hacienda.



77.- Según el artículo 81 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia, la suma de las disponibilidades líquidas y los derechos reconocidos pendientes de cobro, menos las obligaciones reconocidas pendientes de pago, según la situación que los mismos presenten a 31 de diciembre del ejercicio anterior, con referencia a un ejercicio presupuestario determinado, es:

- a) La previsión económica y presupuestaria que deben contener los Planes sectoriales y transversales, coherentes con marco presupuestario plurianual vigente en cada momento. Con dicha finalidad, estos documentos deberán ser informados por la consejería competente en materia de hacienda.
- b) La cuenta de operaciones comerciales de los organismos autónomos y de las agencias públicas autonómicas.
- c) El plan de actuación, inversiones y financiación de las entidades instrumentales del sector público autonómico con presupuesto estimativo.
- d) El remanente de Tesorería de la Comunidad o de cada uno de sus organismos autónomos administrativos.

78.- Qué materias no se encuentran afectadas por la reserva legal del artículo 5 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia:

- a) Los Convenios y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas previstos en el artículo 35 del Estatuto de Autonomía.
- b) La coordinación presupuestaria de las entidades locales de Galicia.
- c) La creación y supresión de los organismos autónomos.
- d) El establecimiento, la modificación y la supresión de los recargos sobre los impuestos del Estado.

79.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta conforme al Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia, en relación con la prescripción:

- a) Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Hacienda de la Comunidad a reconocer o liquidar créditos a su favor, computándose el citado plazo desde el día en el que el derecho pudo ejercitarse.
- b) Prescribirá a los cinco años el derecho de la Hacienda de la Comunidad al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, que se contará desde su vencimiento.
- c) Prescribirá a los cinco años el derecho al reconocimiento o a la liquidación de toda obligación, computándose el plazo desde el momento en el que ésta sea exigible conforme a derecho.
- d) Todas las alternativas son ciertas.

80. Conforme al artículo 52 del Decreto legislativo 1/1999 de 7 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad autónoma de Galicia, acompañado de la documentación establecida en el artículo 51 se remitirá al Parlamento de Galicia los efectos previstos en el artículo 53.1 del Estatuto de Autonomía:

- a) Antes del 20 de octubre de cada año.
- b) Antes del 31 de diciembre de cada año.
- c) Antes del 1 de octubre de cada año.
- d) Antes del 31 de octubre de cada año.

81. Conforme al artículo 91 bis del Decreto legislativo 1/1999 de 7 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, los depósitos y garantías en efectivo constituidos ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma respecto de los cuales no se realice ninguna gestión por parte de los interesados en el ejercicio de su derecho de propiedad prescribirán a favor de la Hacienda de la Comunidad Autónoma en el plazo de:

- a) Cinco años.
- b) Diez años.
- c) Quince años.
- d) Veinte años.

82.- Según el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale cuál de las siguientes materias queda excluida de la obligatoriedad de negociación:

- a) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.
- b) Los planes de Previsión Social Complementaria.
- c) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
- d) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.



83.- Según el artículo 40 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrá la siguiente función, en sus respectivos ámbitos:

- a) Ser informados de la incoación de los expedientes disciplinarios.
- b) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.
- c) Tener conocimiento y ser oídos en las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.
- d) Emitir informe sobre la determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.

84.- Según el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, poner en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados:

- a) Es un principio de conducta.
- b) Es un principio ético.
- c) Es un deber de los empleados públicos.
- d) Es un derecho individual de los empleados públicos.

85.- Según el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones:

- a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos no comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves.
- b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y no comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban o con distinta categoría y función.
- c) Demérito. La imposición de sanción por demérito se llevará a cabo por procedimiento sumario.
- d) Apercibimiento.



86.- Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con relación al Real Decreto legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) El Real Decreto legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público no tipifica las faltas o infracciones.
- b) El Real Decreto legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece únicamente la tipificación de las faltas leves.
- c) El Real Decreto legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público remite a la ley, nacional o autonómica, la tipificación de las faltas graves.
- d) Todas las anteriores son falsas.

87.- Según el artículo 70 del Real Decreto 5/2015, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado público, la ejecución de la oferta de empleo público deberá desarrollarse dentro del plazo de:

- a) Dos años prorrogable.
- b) Tres años improrrogable.
- c) Dos años improrrogable.
- d) Tres años prorrogable.

88.- Según el artículo 46 del Real Decreto 5/2015, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado público, no están legitimados para convocar una reunión:

- a) Las organizaciones sindicales.
- b) Los Delegados de personal.
- c) Los Comités de empresa.
- d) La Mesa General de negociación.

89.- Conforme al Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal dispondrán de un crédito de horas mensuales cuando sean hasta 100 funcionarios de:

- a) Cinco horas.
- b) Siete horas.
- c) Diez horas.
- d) Quince horas.



90.- Conforme a la Ley 2/2015 de 29 de abril, de empleo público de Galicia, las propuestas de modificación de las relaciones de puestos de trabajo motivadas por sentencias firmes que reconozcan situaciones laborales de carácter indefinido, cuando la persona afectada no pudiera ser adscrita a un puesto de trabajo vacante deberá realizarse en el plazo máximo de:

- a) Un mes desde la firmeza de la sentencia judicial.
- b) Dos meses desde la firmeza de la sentencia judicial.
- c) Tres meses desde la firmeza de la sentencia judicial.
- d) Seis meses desde la firmeza de la sentencia judicial.

91. Conforme al artículo 129 de la Ley 2/2015 de 29 de abril, de empleo público de Galicia, durante las licencias para la realización de estudios sobre materias directamente relacionadas con las administraciones públicas, se percibirán:

- a) La totalidad de las retribuciones.
- b) La totalidad de las retribuciones sin trienios.
- c) Únicamente las retribuciones básicas.
- d) No se percibirán retribuciones.

92.- Conforme al artículo 204 de la Ley 2/2015 de 29 de abril, de empleo público de Galicia, las entidades locales aprobarán y publicarán la oferta de empleo público en el plazo de:

- a) Un mes desde la aprobación del presupuesto.
- b) Treinta días hábiles desde la aprobación del presupuesto.
- c) Dos meses desde la aprobación del presupuesto.
- d) Seis meses desde la aprobación del presupuesto.

93.- Según lo establecido en el artículo 48 de la Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia, en las ofertas de empleo público se reservará un porcentaje de las plazas convocadas para ser cubiertas entre personas con discapacidad:

- a) No superior al 7%.
- b) No inferior al 7%.
- c) No inferior al 5%.
- d) No superior al 5%.



94.- Según lo establecido en el artículo 103 (reasignación de efectivos) de la Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia, si el puesto de trabajo asignado por reasignación estuviese ubicado en otra localidad y a consecuencia de ello el personal funcionario afectado trasladara su lugar de residencia, se percibirán las siguientes cantidades, sin perjuicio de otras ayudas que el plan de ordenación de recursos humanos pueda establecer. Señala la incorrecta:

- a) El abono de los gastos de viaje, incluidos los de los integrantes de la unidad familiar.
- b) El abono de los gastos de transporte de muebles y equipamiento.
- c) Una indemnización de tres dietas de la persona afectada y de cada miembro de su familia que efectivamente se traslade.
- d) Una indemnización de cuatro mensualidades de la totalidad de las retribuciones, salvo el complemento de desempeño.

95.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia las licencias por asuntos propios tendrán las siguientes condiciones:

- a) Serán con retribución y con una duración que, no exceda de dos meses cada tres años de prestación de Servicios efectivos.
- b) Serán sin retribución y con una duración que, acumulada, no exceda de dos meses cada tres años de prestación de Servicios efectivos.
- c) Serán sin retribución y con una duración que, acumulada, no exceda de tres meses cada dos años de prestación de Servicios efectivos.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

96.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, la anotación en el correspondiente registro de personal de la sanción de separación del servicio:

- a) Será cancelada, de oficio o a solicitud de la persona interesada, cuando haya transcurrido el plazo de tres años desde su imposición.
- b) Será cancelada, de oficio o a solicitud de la persona interesada, cuando haya transcurrido el plazo de dos años desde su imposición.
- c) Será cancelada, de oficio o a solicitud de la persona interesada, cuando haya transcurrido el plazo de un año desde su imposición.
- d) No será objeto de cancelación.

97.- De acuerdo con el artículo 192 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia:

- a) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un procedimiento disciplinario es de seis meses, a contar desde la comisión de los hechos.
- b) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un procedimiento disciplinario es de un año.
- c) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un procedimiento disciplinario es de seis meses, a contar desde la notificación del acuerdo de inicio.
- d) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un procedimiento disciplinario es de dos años.

98.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, convocar y resolver los concursos específicos de provisión de puestos de trabajo relativos a una consejería incluidos en las relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario y laboral de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico:

- a) Corresponde a las personas titulares de las consejerías.
- b) Corresponde a la persona titular de la Dirección General de Función Pública.
- c) Corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de administraciones públicas.
- d) Corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de función pública.

99.- Según el artículo 1 de la Ley 53/1984, del 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, la resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad se dictará en el plazo de:

- a) Tres meses.
- b) Un mes.
- c) Quince días.
- d) Dos meses.

100.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley que en representación del sector público pertenezca a Consejos de Administración u órganos de gobierno de Entidades o Empresas públicas o privadas, no podrá pertenecer:

- a) A más de un Consejo de Administración u órgano de gobierno de Entidades o Empresas públicas, salvo que excepcionalmente se autorice para supuestos concretos mediante orden del ministerio competente u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma.
- b) A más de dos Consejos de Administración u órganos de gobierno de Entidades o Empresas públicas, salvo que excepcionalmente se autorice para supuestos concretos mediante orden del ministerio competente u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma.
- c) A más de un Consejo de Administración u órgano de gobierno de Entidades o Empresas públicas, salvo que excepcionalmente se autorice para supuestos concretos mediante acuerdo del Gobierno, órgano competente de la Comunidad Autónoma o Pleno de la Corporación Local correspondiente.
- d) A más de dos Consejos de Administración u órganos de gobierno de Entidades o Empresas públicas, salvo que excepcionalmente se autorice para supuestos concretos mediante acuerdo del Gobierno, órgano competente de la Comunidad Autónoma o Pleno de la Corporación Local correspondiente.

101.- Según el artículo 1 de la Ley 53/1984, del 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, esta Ley no será de aplicación a:

- a) El personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas dependientes.
- b) El personal al servicio de la Seguridad Social, de sus Entidades Gestoras y de cualquier otra Entidad u Organismo de la misma.
- c) El personal que preste servicios en Empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50 por 100.
- d) El personal al servicio del Banco Central Europeo y de las instituciones financieras públicas.

102.- Quedan exceptuadas del ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas:

- a) El dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, en cualquier caso.
- b) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, en cualquier caso.

- c) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social.
- d) La colaboración y la asistencia a Congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional.

103. La Ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, incluye dentro de su ámbito de aplicación:

- a) Al personal militar al servicio de la Administración del Estado.
- b) Al personal que aun desempeñando funciones públicas perciba sus retribuciones mediante arancel.
- c) Al personal al servicio de las entidades gestoras de la Seguridad Social.
- d) Todas las anteriores son correctas.

104.- Conforme a la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, uno de los requisitos necesarios para autorizar la compatibilidad de actividades públicas es que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de:

- a) Secretario de Estado.
- b) Ministro.
- c) Subsecretario.
- d) Director General.

105.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, en materia de igualdad retributiva en el empleo público, para alcanzar una plena eficacia del principio de igual retribución por trabajo de igual valor:

- a) Se realizarán valoraciones técnicas a cargo de personal especializado de las plazas de funcionarios y funcionarias y/o de los puestos de trabajadores y trabajadoras cuando en los cuerpos, escalas, grupos o categorías objeto de comparación se observe en uno la predominancia de mujeres y en otro la predominancia de hombres.
- b) Se establecerá que, de existir méritos iguales entre dos o más personas candidatas, serán admitidas las mujeres, salvo si considerando objetivamente todas las circunstancias concurrentes en las personas candidatas de ambos sexos existen motivos no discriminatorios para preferir al hombre.



c) Con anterioridad a cualquier oferta de empleo público se analizará si los requisitos exigidos a las personas aspirantes determinan –todos o alguno– un perjuicio para las mujeres o para un colectivo predominantemente femenino, y, si es así, se realizarán valoraciones técnicas a cargo de personal especializado de las plazas de funcionarios y funcionarias y/o de los puestos de trabajadores y trabajadoras con la finalidad de comprobar si esos requisitos son absolutamente necesarios para el desarrollo de las funciones. Si no lo fueran, serán eliminados en la oferta pública de empleo.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

106.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, que regula la promoción del ejercicio de derechos de conciliación en el empleo público gallego:

a) Cuando las pruebas de promoción interna comprendan la valoración de méritos se establecerá a favor de las candidatas que sean mujeres y que estén utilizando o hubieran utilizado, en los últimos cuatro años, una licencia de maternidad, una reducción de jornada o una excedencia para el cuidado de familiares, una puntuación específica que se graduará en función del tiempo utilizado en el ejercicio de esos derechos.

b) Cuando las pruebas de promoción interna comprendan la valoración de méritos se establecerá a favor las candidatas que sean mujeres y que estén utilizando o hubieran utilizado, en los últimos cinco años, una licencia de maternidad, una puntuación específica que se graduará en función del tiempo utilizado en el ejercicio de ese derecho.

c) Cuando las pruebas de promoción interna comprendan la valoración de méritos de los candidatos y candidatas se establecerá a favor de los mismos que, sean mujeres o sean hombres, estén utilizando o hubieran utilizado, en los últimos cinco años, una licencia de maternidad, un permiso de paternidad, una reducción de jornada o una excedencia para el cuidado de familiares, una puntuación específica que se graduará en función del tiempo utilizado en el ejercicio de esos derechos.

d) Cuando las pruebas de promoción interna comprendan la valoración de méritos de los candidatos y candidatas se establecerá a favor de los mismos que, sean mujeres o sean hombres, estén utilizando o hubieran utilizado, en los últimos dos años, una licencia de maternidad o un permiso de paternidad, una puntuación específica que se graduará en función del tiempo utilizado en el ejercicio de esos derechos.

107.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, que regula el derecho de las mujeres gestantes a elegir el período de vacaciones y preferencias derivadas de la existencia de responsabilidades familiares:

- a) La Administración pública gallega reconoce el derecho a la elección del período de vacaciones de las mujeres gestantes a su servicio y a la preferencia de elección de las personas con hijos menores de 12 años o mayores dependientes a su cuidado. Tendrá prioridad quien reúna la condición de progenitor de familia numerosa.
- b) La Administración pública gallega reconoce el derecho a la elección del período de vacaciones de las mujeres gestantes a su servicio y a la preferencia de elección de las personas con hijos menores de 8 años y el derecho a la fijación de un período alternativo de vacaciones en los casos de coincidencia del período ordinario de vacaciones con los permisos de lactancia del otro progenitor. Tendrá prioridad quien reúna la condición de progenitor de familia numerosa.
- c) Los permisos y los períodos de incapacidad temporal de las mujeres gestantes pueden acumularse a las vacaciones. En estos casos, el derecho a las vacaciones podrá ejercerse hasta 30 días después de finalizado el año natural al que correspondan.
- d) Los permisos y los períodos de incapacidad temporal de las mujeres gestantes pueden acumularse a las vacaciones. En estos casos, el derecho a las vacaciones podrá ejercerse hasta 45 días después de finalizado el año natural al que correspondan.

108.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 54 del Decreto legislativo 2/2015, del 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, las valoraciones técnicas de plazas de funcionarios y funcionarias y/o puestos de trabajadores y trabajadoras, a los efectos establecidos en los artículos 47 y 52 se podrán encargar a:

- a) A la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- b) A los órganos competentes de gestión de recursos humanos de la Administración pública gallega.
- c) Al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
- d) Al Consello gallego de las Mujeres.

109.- La declaración de principios será publicada, según el artículo 58 del Decreto legislativo 2/2015, del 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, en:

- a) La página web de cada centro de trabajo y unidad administrativa.



- b) El tablero de anuncios de cada centro de trabajo y unidad administrativa.
- c) En el Diario Oficial de Galicia.
- d) Ninguna es correcta.

110.- Conforme al artículo 102 del Decreto legislativo 2/2015, del 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, a la persona responsable del Plan de programación del tiempo de la ciudad le corresponde convocar la Mesa de Concertación del Plan de programación del Tiempo de la Ciudad:

- a) En todo caso, una vez al año y antes de julio.
- b) Cuantas veces entienda conveniente.
- c) Únicamente en el primer trimestre de cada año.
- d) La a) y la b) son correctas.

111.- Conforme al Decreto Legislativo 2/2015 de 12 de febrero por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, se entiende que existe infrarrepresentación del sexo femenino cuando:

- a) En el cuerpo, escala, grupo o categoría exista una diferencia porcentual de, por lo menos, veinte puntos entre el número de mujeres y el número de hombres.
- b) En el cuerpo, escala, grupo o categoría exista una diferencia porcentual de, por lo menos, diez puntos entre el número de mujeres y el número de hombres.
- c) En el cuerpo, escala, grupo o categoría exista una diferencia porcentual de, por lo menos, treinta puntos entre el número de mujeres y el número de hombres.
- d) En el cuerpo, escala, grupo o categoría exista una diferencia porcentual de, por lo menos, cuarenta puntos entre el número de mujeres y el número de hombres.

112.- Conforme al Decreto Legislativo 2/2015 de 12 de febrero por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, en los cursos, jornadas u otras actividades formativas organizadas o financiadas por la administración pública gallega se reservará:

- a) Un 50% de las plazas a mujeres que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria, que accederán al turno reservado solo si no hubiera suficientes solicitudes de participación de las mujeres.
- b) Un 50% de las plazas a mujeres que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria, en todo caso.



c) Un 40% de las plazas a mujeres que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria, que accederán al turno reservado solo si no hubiera suficientes solicitudes de participación de las mujeres.

d) Un 51% de las plazas a mujeres que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria, que accederán al turno reservado solo si no hubiera suficientes solicitudes de participación de las mujeres.

113.- De acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto legislativo 1/2013, del 29 de noviembre, por el que aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, se define como:

- a) Discriminación indirecta.
- b) Discriminación por asociación.
- c) Acoso.
- d) Ninguna es correcta.

114.- El órgano, de carácter permanente y especializado, encargado de promover la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, según el artículo 56 del Real Decreto legislativo 1/2013, del 29 de noviembre, por el que aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, es:

- a) El Consejo Nacional de la Discapacidad.
- b) La Oficina de atención a la Discapacidad.
- c) El Observatorio Estatal de la Discapacidad.
- d) Dirección General de derechos de las personas con discapacidad.

115.- Conforme al artículo 73 do Real Decreto legislativo 1/2013, del 29 de noviembre, por el que aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se configura como instrumento de promoción y orientación de las políticas públicas de conformidad con la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad:

- a) Al Consejo Nacional de la Discapacidad.
- b) A la Oficina de atención a la Discapacidad.
- c) El Observatorio Estatal de la Discapacidad.
- d) Dirección General de derechos de las personas con discapacidad.



116.- Conforme al Real decreto legislativo 1/2013 de 29 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en el ámbito del empleo, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación a las que se refiere esta norma serán de aplicación con respecto a lo previsto en la legislación laboral:

- a) De aplicación preferente.
- b) De aplicación supletoria.
- c) No serán de aplicación.
- d) De aplicación prioritaria.

117.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, previa audiencia de los sectores interesados y de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, el Gobierno establecerá un sistema arbitral que atienda y resuelva las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación. Señale la afirmación correcta:

- a) Tendrá carácter no vinculante, sin perjuicio de la protección administrativa y judicial que en cada caso proceda.
- b) Los órganos de arbitraje estarán integrados por representantes de los sectores interesados, de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y de los juzgados de familia.
- c) El sometimiento de las partes al sistema arbitral será voluntario y deberá constar expresamente por escrito.
- d) El Observatorio Estatal de la Discapacidad se configura como órgano superior de arbitraje en materia de discapacidad.

118.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, inclusión social es:

- a) Es el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona.
- b) Es el principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad.

c) El principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con los demás.

d) Es la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad.

119.- De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, cuando las solicitudes se refieran a información que afecte a derechos e intereses de terceros:

a) El órgano encargado de resolver les concederá un plazo de quince días para que puedan formular alegaciones y se producirá la suspensión del plazo para resolver hasta que se reciban las alegaciones.

b) No es necesario conceder plazo para que puedan formular alegaciones.

c) El órgano encargado de resolver les concederá un plazo de quince días para que puedan formular alegaciones y se producirá la suspensión del plazo resolver hasta que transcurra el plazo concedido para su presentación.

d) La a y la c son correctas.

120.- Conforme al artículo 43 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, la persona que ocupe un alto cargo deberá evitar, en todo caso, la influencia de sus intereses personales en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades por suponerle un beneficio o perjuicio. A tales efectos, se considera interés personal:

a) Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, así como los de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y de afinidad.

b) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que el alto cargo o sus familiares estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo.

c) Los de personas jurídicas o entidades privadas en las cuales el alto cargo, su cónyuge o persona unida en análoga relación hubieran ejercido funciones de dirección, asesoramiento o administración en los dos años anteriores al nombramiento.

d) Todas las alternativas son ciertas.

121.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, en el ejercicio de su derecho al acceso a la información pública se garantizará a la ciudadanía:

- a) La posibilidad de utilización de la información obtenida, con autorización previa y sin más limitaciones que las derivadas de esta u otras leyes.
- b) La recepción de la información pública en formato electrónico o en papel, según la disponibilidad de la Administración.
- c) La realización de propuestas y sugerencias tanto sobre la información demandada como sobre los formatos, programas o lenguajes informáticos empleados.
- d) Ninguna es correcta.

122.- Conforme lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1/2016, del 18 de enero, de transparencia y de buen gobierno, la coordinación general y el control interno en materia de transparencia, en el ámbito del sector autonómico será ejercido por:

- a) La Comisión interdepartamental de información y Evaluación.
- b) La Comisión de la Transparencia.
- c) El Comisionado de la Transparencia.
- d) La Dirección General con competencias en materia de evaluación y reforma administrativa.

123.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1/2016, del 18 de enero, de transparencia y de buen gobierno, el órgano competente para ordenar la incoación de un procedimiento sancionador para las infracciones disciplinarias es:

- a) El Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta de la persona titular de la Consellería competente en materia de función pública.
- b) La persona titular de la Consellería en materia de función pública.
- c) La persona titular de la Consellería en materia de administraciones públicas.
- d) La persona titular de la Consellería en materia de hacienda pública.

124. Conforme a la Ley 1/2016 de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, en las solicitudes de acceso a la información el plazo para resolver será de:

- a) Un mes desde la recepción de la solicitud.
- b) Treinta días desde la recepción de la solicitud.
- c) Diez días desde la recepción de la solicitud.
- d) Tres meses desde la recepción de la solicitud.

125.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, el Comisionado de la Transparencia:

- a) Prestará la colaboración necesaria al Valedor do Pobo para el correcto desarrollo de sus funciones.
- b) Remitirá al Valedor do Pobo el informe de la Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación.
- c) Es un órgano colegiado independiente adscrito al Valedor do Pobo.
- d) Ejerce la función, entre otras, de adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones legales en materia de transparencia y buen gobierno, oída la Comisión de la Transparencia.

126.- El artículo 44 de la Ley 9/2017, de contratos del sector público establece que serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en el apartado 2 de este artículo (anuncios de licitación, pliegos, actos de trámite...), cuando se refieran a los siguientes contratos:

- a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros.
- b) Contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a tres millones de euros y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado igual o superior a cien mil euros.
- c) Contratos de obras cuyo presupuesto base de licitación sea superior a tres millones de euros y de suministro y servicios, que tenga un presupuesto bases de licitación superior a cien mil euros.
- d) Contratos de obras cuyo presupuesto base de licitación sea igual o superior a tres millones de euros y de suministro y servicios, que tenga un presupuesto bases de licitación igual o superior a cien mil euros.

127.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 9/2017, de contratos del sector público, cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del contrato, este podrá introducir las siguientes limitaciones, justificándolas debidamente en el expediente:

- a) Podrá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta.
- b) Podrá limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador.
- c) Podrá limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador, pero no el número de lotes a los que un licitador pueda presentar ofertas.
- d) Son correctas a) y b).



128.- Conforme al artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y la duración de los contratos, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con el plazo de duración de los contratos:

- a) La duración de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios no podrá exceder, incluidas las prórrogas, de 40 años cuando comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio.
- b) Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, sin incluir las prórrogas.
- c) La prórroga de los contratos puede producirse por consentimiento tácito de las partes.
- d) Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año, incluidas las prórrogas.

129.- Cuál de las siguientes no es una causa de nulidad de los contratos conforme al artículo 39 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Las indicadas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común.
- b) El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los contratos en los artículos 204 y 205.
- c) La carencia o insuficiencia de crédito.
- d) Estar incurso el contratista en alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 71.

130.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta conforme al artículo 106 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación con la exigencia y régimen de la garantía provisional:

- a) La garantía provisional solo será exigible cuando el órgano de contratación lo acuerde y justifique en el expediente.
- b) La garantía provisional no podrá exceder del 3 % del presupuesto base de licitación, incluido el IVA.
- c) La garantía provisional podrá depositarse, en cualquier caso, ante el órgano de contratación.
- d) La garantía provisional se fijará atendiendo al presupuesto total del contrato, aunque este se divida en lotes.

131.- Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, para los contratos de obras el procedimiento abierto simplificado podrá ser utilizado cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

- a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 euros y que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no existe ninguno evaluable mediante juicio de valor.

- b) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.100.000 euros y que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no existe ninguno evaluable mediante juicio de valor.
- c) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 euros (IVA incluido) y que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no existe ninguno evaluable mediante juicio de valor.
- d) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.100.000 euros (IVA incluido) y que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no existe ninguno evaluable mediante juicio de valor.

132.- Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, en los procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada el plazo de presentación de proposiciones para los contratos de concesión de obras y servicios será:

- a) No inferior a 30 días contados desde el envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
- b) No inferior a 40 días contados desde el envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
- c) No inferior a 35 días contados desde el envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
- d) No inferior a 25 días contados desde el envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

133.- Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público en los contratos de obras que no estén sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones será como mínimo de:

- a) Veintiséis días desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante.
- b) Treinta y seis días desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante.
- c) Cuarenta y cinco días desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante.
- d) Veintiún días desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante.

134.- Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo desde la apertura de ofertas en el plazo máximo de:

- a) Quince días hábiles.
- b) Quince días naturales.



- c) Diez días hábiles.
- d) Diez días naturales.

135.- De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será:

- a) De seis meses, que se contarán desde la fecha el acuerdo de inicio en los procedimientos iniciados de oficio.
- b) De tres meses, que se contarán desde la fecha de notificación al interesado del acuerdo de inicio en los procedimientos iniciados de oficio.
- c) De tres meses, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación en los procedimientos iniciados a instancia del interesado.
- d) De tres meses, desde la fecha de presentación de la solicitud en los procedimientos iniciados a instancia del interesado.

136.- Conforme al artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en caso de no resolver en plazo la solicitud de un interesado, la resolución expresa posterior:

- a) Solo podrá ser confirmatoria del sentido del silencio, en los casos de desestimación.
- b) Se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio, en los casos de desestimación.
- c) Se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio, en los casos de estimación.
- d) Todas las anteriores son falsas.

137.- Conforme al artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale qué afirmación es correcta, en relación con la eficacia retroactiva de los actos administrativos:

- a) Tiene carácter excepcional.
- b) Se otorgará a los actos que se dicten en sustitución de actos anulados.
- c) Se otorgará a los actos que se dicten en sustitución de actos anulados y estos produzcan efectos favorables para los interesados.
- d) La a y la b son correctas.



138.- Cuál de las siguientes causas no serviría para sustentar un recurso extraordinario de revisión, según el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de derecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
- b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, siempre que sean anteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
- c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, posterior a aquella resolución.
- d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación declarada por sentencia firme

139.- Conforme a la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento cualquiera que haya sido la forma de iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión siempre que sea el mismo órgano el que deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra dicho acuerdo:

- a) Se podrá interponer recurso de súplica.
- b) No procederá recurso alguno.
- c) Se podrá interponer recurso extraordinario de revisión.
- d) Se podrá interponer recurso de reposición.

140.- Señale la incorrecta sobre la declaración de lesividad de actos anulables prevista en el artículo 107 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo
- b) La declaración de lesividad no será susceptible de recurso.
- c) Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
- d) Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.

141.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todas las notificaciones que se practiquen en papel:

- a) Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.
- b) Podrán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para facilitar el acceso al contenido de las mismas de forma voluntaria.
- c) Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que accedan al contenido de las mismas de forma obligatoria.
- d) Se pondrán a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante y se tomará como fecha de notificación la fecha en la que se produce la puesta a disposición.

142.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuanto a los límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos:

- a) La nulidad o anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento.
- b) La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla.
- c) La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.
- d) La anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla. La nulidad del acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento, así como la de las partes de mismo independientes de aquella.

143.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale cuál de las siguientes no es una función de las Conferencias Sectoriales:

- a) Intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las distintas Administraciones Públicas, en ejercicio de sus competencias, y que puedan afectar a las otras Administraciones.
- b) La deliberación de asuntos y la adopción de acuerdos de interés para el Estado y las Comunidades Autónomas, estando asistida para la preparación de sus reuniones por un Comité preparatorio del que forman parte un Ministro del Gobierno, que lo preside, y un Consejero de cada Comunidad Autónoma,

c) Ser informadas sobre los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas cuando afecten de manera directa al ámbito competencial de las otras Administraciones Públicas o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable, bien a través de su pleno o bien a través de la comisión o el grupo de trabajo mandatado al efecto.

d) Fijar los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución al comienzo del ejercicio económico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

144.- Conforme al artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público son criterios de graduación de la responsabilidad:

- a) El lucro o beneficio obtenido.
- b) El hecho de aprovecharse de que las personas afectadas pertenezcan a colectivos especialmente protegidos.
- c) La reparación de los perjuicios producidos.
- d) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

145. Conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los conflictos positivos o negativos de atribuciones entre órganos de un mismo Ministerio serán resueltos por:

- a) El superior jerárquico común en el plazo de diez días.
- b) El superior jerárquico común en el plazo de quince días.
- c) El superior jerárquico común en el plazo de un mes.
- d) El superior jerárquico común en el plazo de tres meses.

146.- Conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades autonómicas, el convenio administrativo deberá acompañarse de una memoria justificativa donde se analice (señale la incorrecta):

- a) Su impacto económico.
- b) Su necesidad y oportunidad.
- c) Su carácter contractual.
- d) El cumplimiento de lo previsto en la propia Ley 40/2015.



147.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, existirá infracción continuada en los casos de:

- a) Realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.
- b) Hechos que hayan sido sancionados por un órgano de Unión Europea y siempre que concorra la identidad de sujeto y fundamento.
- c) Reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
- d) Hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.

148.- Conforme al artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la propuesta de resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial deberá formularse en el siguiente plazo:

- a) De cinco días desde la finalización del trámite de audiencia.
- b) De diez días desde la finalización del trámite de audiencia.
- c) De quince días desde la finalización del trámite de audiencia.
- d) De siete días desde la finalización del trámite de audiencia.

149.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las decisiones que adopten las Conferencias Sectoriales podrán revestir la forma de:

- a) Acuerdo o recomendación.
- b) Acuerdo o declaración institucional.
- c) Declaración institucional o recomendación.
- d) Compromisos de actuación con el rango normativo que proceda.

150.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula la los convenios se extinguen:

- a) Por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
- b) El acuerdo unánime de todos los firmantes no es causa de resolución.,
- c) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo, no es causa de resolución.
- d) No podrán preverse en el convenio causas de resolución distintas a las establecidas en este artículo.



SUPUESTO PRÁCTICO (texto 1)

El día 13 de mayo de 2022, Dña. Fernanda XX sufre una aparatosa caída en la vía pública por culpa de introducir su pie en un socavón que no se encontraba señalizado. Es ingresada de inmediato en el Hospital de referencia y permanece a la espera de ser operada. Finalmente, el día 15 de junio de 2022 es intervenida quirúrgicamente, determinándose la existencia de secuelas físicas como consecuencia del accidente, con las que deberá convivir el resto de su vida. Recibe el alta el día 18 de junio de 2022. Dña. Fernanda acude a un abogado para analizar la posibilidad de entablar una reclamación de responsabilidad contra la Xunta de Galicia, como titular de la vía. El abogado le aconseja reclamar 29.560 euros en concepto de daños físicos.

151.- ¿Qué día prescribe el derecho a reclamar de Dña. Fernanda?

- a) El 13 de mayo de 2023.
- b) El 13 de noviembre de 2023.
- c) El 15 de junio de 2023.
- d) El 18 de junio 2023.

152.- ¿Qué contenido debe tener la reclamación o solicitud que en su caso presente Dña. Fernanda?

- a) Evaluación económica de la responsabilidad y firma de la solicitante.
- b) Alegaciones, documentos e informaciones, así como proposición de prueba concretando los medios de prueba.
- c) La relación de causalidad entre la lesión y el funcionamiento del servicio.
- d) Todas las alternativas son ciertas.

153.- En la instrucción del expediente, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Se debe solicitar informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado el daño, no pudiendo exceder de quince días el plazo para su emisión y dictamen del Consello Consultivo de Galicia.
- b) Se debe solicitar informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado el daño, no pudiendo exceder de quince días el plazo para su emisión.
- c) Se debe solicitar dictamen del Consello Consultivo de Galicia.
- d) Se debe solicitar informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado el daño, no pudiendo exceder de diez días el plazo para su emisión.

154.- Si Dña. Fernanda presentó su solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial el día 11 de noviembre de 2022. ¿Cuál sería el plazo máximo de que dispone la Administración para notificar y dictar la resolución?

- a) El día 11 de noviembre de 2023.
- b) El día 11 de mayo de 2023.
- c) El día 12 de mayo de 2023.
- d) El día 11 de febrero de 2023.

155.- Respecto de la cuantía de la indemnización:

- a) Dña. Fernanda puede calcular el importe de los daños físicos a tanto alzado por no haber una norma que concrete dichos importes.
- b) Dña. Fernanda debe utilizar baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
- c) Dña. Fernanda puede acudir a los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
- d) Dña. Fernanda calculará el importe de la indemnización con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables.

156.- La Xunta de Galicia estudia la posibilidad de derivar la responsabilidad por el accidente sufrido por Dña. Fernanda a la empresa contratista que estaba realizando las obras en el firme de la calzada. Señale qué afirmación es correcta:

- a) La Xunta de Galicia no podrá derivar la responsabilidad al contratista por el accidente sufrido.
- b) Para ello la Administración debe dar trámite de audiencia a la contratista en el procedimiento administrativo.
- c) La Administración puede declarar sin más la responsabilidad de la contratista.
- d) Habrá que estar a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

SUPUESTO PRÁCTICO (texto 2)

La empresa GRANITOS MORRAZO SL obtiene una subvención conferida por el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) cuya finalidad es la construcción de una nueva nave industrial con el objetivo de aumentar su productividad y financiada con fondos comunitarios.

Para comprobar la realización de las inversiones, dos técnicos del IGAPE se personan en las oficinas de la empresa para examinar la documentación contable.

El día 6 de octubre de 2022, a pesar de que el personal del IGAPE había comunicado su visita a los responsables de la empresa, el personal de GRANITOS MORRAZO SL no dispone de toda la documentación ordenada y preparada. El IGAPE le practica un requerimiento al responsable de GRANITOS MORRAZO SL para que comparezca en las oficinas del IGAPE y acompañe la documentación contable. El día y hora señalados, el administrador no comparece ni se entrega documentación alguna al personal del IGAPE.

157.- ¿Cómo calificaría la conducta del administrador de la entidad beneficiaria?

- a) Constituye una infracción leve consistente en la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero.
- b) No es susceptible de reproche jurídico en la medida en que el personal del IGAPE se excedió en el ejercicio de sus funciones.
- c) Constituye una infracción grave consistente en la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero.
- d) Todas las anteriores son falsas.

158.- Si se decidiese instruir un expediente sancionador a la empresa, qué órgano sería el encargado de resolver de acuerdo con el artículo 64 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia:

- a) El Presidente del IGAPE
- b) El Conselleiro competente al que está adscrito el IGAPE y que en tal condición lo preside.
- c) El titular del departamento concedente.
- d) El Consello de la Xunta.

159.- Si por las circunstancias concurrentes en el caso se decide tipificar la conducta como infracción muy grave. Señale qué sanción de las siguientes podría imponerse:

- a) Una multa pecuniaria proporcional del doble al triple de la cantidad indebidamente obtenida.
- b) Una multa de 6.000 a 30.000 euros.
- c) La pérdida durante un plazo de seis años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la administración u otros entes públicos.
- d) Todas las anteriores son falsas.



160.- En caso de imponerse sanción por infracción muy grave ¿cuándo prescribiría la infracción teniendo en cuenta el previsto en el enunciado?

- a) El seis de octubre de 2026.
- b) El seis de mayo de 2023.
- c) El seis de octubre de 2023.
- d) Todas las anteriores son falsas.

161.- Durante la instrucción del procedimiento sancionador, se tiene noticia de la incoación de diligencias previas por el Juzgado de instrucción núm. 3 de Santiago de Compostela por supuesta falsificación documental. Señala que debe hacer la Administración autonómica al respecto:

- a) Continuar el procedimiento administrativo ya que el bien jurídico protegido por el tipo penitenciario no es el mismo que el afectado por el procedimiento sancionador.
- b) Suspender el procedimiento hasta que no se dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones.
- c) Suspender el procedimiento hasta que se produzca la devolución del expediente por el ministerio fiscal.
- d) La a y la b son correctas.

162.-Qué plazo tendrá la Administración para dictar y notificar la resolución sancionadora:

- a) Un año desde la notificación del acuerdo de inicio.
- b) Tres meses de la notificación del acuerdo de inicio.
- c) Seis meses de que se dictó el acuerdo de inicio.
- d) Tres meses desde que se dictó el acuerdo de inicio.

163.- Sin perjuicio de la eventual sanción, la conducta descrita consistente en dificultar el acceso a la documentación requerida de modo que se impide la comprobación del cumplimiento de los objetivos previstos en la concesión:

- a) Sería causa de nulidad de pleno derecho de la concesión.
- b) Sería una causa de reintegro de la subvención.
- c) Faculta a la Administración para declarar la lesividad de la concesión.
- d) Todas son ciertas.

164. Si finalmente fuese procedente el reintegro de la cantidad percibida por la entidad beneficiaria (señálese la respuesta incorrecta):

- a) La administración podrá exigir de modo coactivo el reintegro, que tendrá naturaleza de ingreso de derecho público.
- b) La administración podrá exigir el reintegro en vía jurisdiccional.
- c) El destino del reintegro lo determinará la normativa de la Unión Europea.
- d) Se devengarán intereses de demora.

165.- En caso de tener que reintegrarse la subvención, en dicha obligación:

- a) La entidad beneficiaria será la obligada al reintegro, sin perjuicio de la responsabilidad mancomunada del administrador.
- b) La entidad beneficiaria será la obligada al reintegro, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del administrador.
- c) La entidad beneficiaria será la obligada al reintegro, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del administrador.
- d) El administrador, en tanto responsable de la conducta que origina el deber de reintegrar, será el obligado al reintegro.

166.- Si se dictase acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro de la subvención, ¿cuál sería el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento?

- a) Doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.
- b) Seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.
- c) Tres meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.
- d) Seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación si el procedimiento se inició por propia iniciativa del órgano competente o doce meses si se inició a partir de una denuncia.

167.- En caso de no resolverse en plazo el procedimiento del reintegro de la subvención:

- a) El procedimiento finaliza por silencio administrativo favorable a la entidad concesionaria de la subvención, que no estará obligada al reintegro.
- b) El procedimiento caduca, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación, conservando las actuaciones realizadas todos sus efectos.
- c) El procedimiento caduca, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación, pero los actos realizados hasta la finalización del plazo pierden su eficacia interruptiva de la prescripción.
- d) Cabe la ampliación del plazo para resolver, si bien dicha ampliación no podrá superar los tres meses.

168.- Si finalmente se efectúa el reintegro, a efectos presupuestarios:

- a) Se produce una ampliación del crédito con cargo al que se concedió la subvención.
- b) Se produce una incorporación de remanentes.
- c) Se produce una reposición de créditos.
- d) Se produce una generación de créditos.

SUPUESTO PRÁCTICO (texto 3)

La Consellería TTTT, precisa adquirir 10 furgonetas para la Dirección Xeral de Inspección que cuenta con un equipo de personal funcionario que necesita realizar desplazamientos por todo el territorio gallego. Por eso es necesario dotarla de un parque móvil adecuado y suficiente para estos desplazamientos.

Objeto del contrato: Suministro de 10 furgonetas pequeñas, mixtas (carga y pasajeros) con motor eléctrico o híbrido enchufable.

Para calcular el importe del contrato se tuvieron en cuenta los precios habituales en el mercado de este tipo de contratos.

Precio del contrato:

Precio IVA excluido	320.000,00€
IVA	67.200,00€
Precio IVA incluido	387.200,00€

El importe del contrato se realiza en términos de precios unitarios referidos a las unidades del contrato que se adquieren.

Precio unitario IVA excluido: 32.000 €

Características técnicas: serán con las especificaciones que figuran en el pliego de prescripciones técnicas.

Tramitación: procedimiento abierto ordinario, sujeto a regulación armonizada.

Plazo de garantía: 3 años.

169.- Atendiendo a los datos del supuesto cual sería el importe del valor estimado y el del presupuesto base de licitación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 100 y 101 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de contratos del sector público:

- a) El valor estimado: 320.000,00 y el presupuesto base de licitación: 387.200,00.
- b) El valor estimado: 320.000,00 más las posibles modificaciones y prórrogas, si las hubiera y el presupuesto base de licitación: 387.200,00
- c) El presupuesto base de licitación: 320.000,00 y el valor estimado: 387.200,00.
- d) El presupuesto base de licitación: 320.000,00 más las posibles modificaciones y prórrogas, si las hubiera y valor estimado: 387.200,00.

170.- El artículo 135 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de contratos del sector público regula el anuncio de licitación. Teniendo en cuenta los datos expuestos en el supuesto práctico y lo establecido en dicho artículo, donde se tendrá que publicar el anuncio de esta licitación:

- a) En el perfil de contratante y en el Diario oficial de la Unión Europea.
- b) En el perfil de contratante, en el Diario oficial de Galicia y en el Diario oficial de la Unión Europea.
- c) En el perfil de contratante, en el Boletín oficial del Estado y en el Diario oficial de la Unión Europea.
- d) En el perfil de contratante, en el Diario oficial de Galicia, en el Boletín oficial del Estado y en el Diario oficial de la Unión Europea.

171.- En relación con la pregunta anterior, el anuncio de licitación no se publicará en otros lugares antes de la publicación en el Diario oficial de la Unión Europea, en el caso en que deban ser publicados en dicho Diario oficial, debiendo indicar la fecha de envío. No obstante, en todo caso podrá publicarse si el órgano de contratación no ha recibido notificación de su publicación, de acuerdo con el mismo artículo 135:

- a) A las 24 horas de la confirmación de la recepción del anuncio enviado.
- b) A las 48 horas de la confirmación del envío del anuncio.
- c) A las 24 horas de la confirmación del envío del anuncio.
- d) A las 48 horas de la confirmación de la recepción del anuncio enviado.

172.- El plazo de presentación de las ofertas, teniendo en cuenta que la Consellería TTTT aceptó la presentación de ofertas por medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público será de:

- a) No inferior a 35 días.
- b) No inferior a 15 días.
- c) No inferior a 26 días.
- d) No inferior a 30 días.

173.- Atendiendo a lo establecido en el artículo 107 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de contratos del sector público la garantía definitiva que debe presentar el adjudicatario será:

- a) El 5% del precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- b) El 5% del precio máximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

- c) El 5% del presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- d) El 5% del valor estimado, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

174.- La garantía definitiva presentada por el adjudicatario, únicamente responderá de los siguientes conceptos según el artículo 110 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público. Señale la incorrecta:

- a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo.
- b) De la inexistencia de vicios o defectos de las furgonetas durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.
- c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato sin incluir las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación.
- d) De las penalidades impuestas al contratista.

175.- Tal y como establece el artículo 198 de la Ley 9/2017 de contratos el sector público, la Consellería TTTT deberá aprobar el acta de conformidad de los bienes entregados:

- a) A partir de los 30 días siguientes a la entrega efectiva de los bienes.
- b) Dentro de los 30 días siguientes a la entrega efectiva de los bienes.
- c) A partir de los 30 días siguientes a la entrega de la factura por parte de la empresa.
- d) A partir de los 30 días siguientes a la entrega de la factura por parte de la empresa.

176.- El artículo 206 de la ley 9/2017, de contratos del sector público, establece que en los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205 (modificaciones no previstas en los pliegos), las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del:

- a) 50 % del precio final del contrato, IVA excluido.
- b) 20 % del precio final del contrato, IVA excluido.
- c) 50 % del precio final del contrato, IVA incluido.
- d) 20 % del precio final del contrato, IVA incluido.

SUPUESTO PRÁCTICO (texto 4)

La consellería de XXX desea contratar la redacción de un proyecto de construcción de un edificio. El plazo de redacción del proyecto será de tres meses y el presupuesto base de licitación será de 30.000 euros con posibilidad de realizar modificaciones del 15% (4.500 euros). El IVA aplicable es del 21% (6.300 euros). El único criterio de adjudicación es el precio. Dado el interés en agilizar la licitación se plantea como procedimiento el abierto simplificado abreviado.

177.- ¿Es correcto acudir a un procedimiento de licitación abierto simplificado abreviado?:

- a) Si, es correcto porque es un contrato de servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros.
- b) Si, es correcto porque es un contrato de servicios de valor estimado inferior a 40.000 euros.
- c) No es correcto porque son trabajos intelectuales.
- d) No es correcto porque el valor estimado es de 30.000 euros

178.- ¿Es correcto el criterio de adjudicación?:

- a) Si, es correcto, porque cuando se utiliza un único criterio en el procedimiento abierto puede ser el precio.
- b) No, dado que estamos ante un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada.
- c) Ninguna es correcta.
- d) No, dado que estamos ante trabajos intelectuales.

179.- ¿Se podría incluir como criterio de adjudicación la reducción del plazo de entrega?

- a) Si, es correcto, porque es un criterio objetivo.
- b) No, dado que estamos ante un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada.
- c) Si.
- d) Todas las anteriores son falsas.

180.- ¿Cuál es el importe de la garantía provisional?

- a) No procederá la constitución de garantía provisional.
- b) 3%.
- c) 5%.
- d) 7%.

PREGUNTAS DE RESERVA

PRIMERA PARTE

181. Conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, "el Estado garantizará en todo el territorio español el nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales de su competencia". Con relación a este instrumento de financiación autonómica, señale la respuesta falsa:

- a) A los efectos de esta disposición, se considerarán servicios públicos fundamentales la educación, la sanidad y los servicios sociales esenciales.
- b) Se considerará que no se llega a cubrir el nivel de prestación de los servicios públicos cuando su cobertura se desvíe del nivel medio de los mismos en el territorio nacional.
- c) El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales tendrá por objeto garantizar que cada Comunidad recibe, en los términos fijados por la Ley, los mismos recursos por habitante, ajustados en función de sus necesidades diferenciales, para financiar los servicios públicos fundamentales.
- d) En la constitución del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales participarán las Comunidades Autónomas con un porcentaje de sus tributos propios, en términos normativos, y el Estado con su aportación, en los porcentajes y cuantías que marque el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

182.- Según el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, admitida la queja, el Defensor del Pueblo promoverá la oportuna investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos de la misma. En todo caso dará cuenta del contenido sustancial de la solicitud al Organismo o a la Dependencia administrativa procedente con el fin de que por su Jefe en el plazo máximo de quince días, se remita informe escrito. Señale la respuesta correcta en relación con este informe:

- a) El superior responsable del organismo o dependencia administrativa promoverá la oportuna investigación y elaborará un informe sobre los problemas generales planteados en la queja presentada.
- b) El superior responsable del organismo o dependencia administrativa registrará y acusará recibo de las quejas que se formulen, que tramitará o rechazará. En este último caso lo hará en escrito motivado pudiendo informar al interesado sobre las vías más oportunas para ejercitar su acción, caso de que a su entender hubiese alguna y sin perjuicio de que el interesado pueda utilizar las que considere más pertinentes.



c) El informe del superior responsable del organismo o dependencia administrativa procedente podrá rechazar aquellas quejas en las que advierta mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aquellas otras cuya tramitación irroque perjuicio al legítimo derecho de tercera persona. Sus decisiones no serán susceptibles de recurso.

d) La negativa o negligencia del funcionario o de sus superiores responsables al envío del informe inicial solicitado podrá ser considerada por el Defensor del Pueblo como hostil y entorpecedora de sus funciones, haciéndola pública de inmediato y destacando tal calificación en su informe anual o especial, en su caso, a las Cortes Generales.

183.- De acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el mandato de los Magistrados del Tribunal Constitucional:

- a) Dura nueve años.
- b) Dura cinco años.
- c) Dura tres años.
- d) Dura cuatro años.

SEGUNDA PARTE

184.- Frente a las resoluciones en materia de acceso a la información pública y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno:

- a) Cabe recurso potestativo de reposición ante órgano que la hubiere dictado o bien recurso contencioso-administrativo.
- b) No cabe reclamación sino recurso contencioso-administrativo, cuando procedan del Presidente de la Xunta de Galicia.
- c) No cabe reclamación sino directamente recurso contencioso-administrativo, cuando sean dictadas por el Consello Galego de Relacións Laborais.
- d) Únicamente cabe recurso contencioso-administrativo.

185.- De conformidad con el artículo 56 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, las entidades públicas instrumentales se adscriben directamente, o a través de otra entidad instrumental:

- a) A la consellería o al órgano que sea competente por razón de la materia de acuerdo con lo que se determine en los decretos de estructura previstos en los artículos 25.5 y 27.1, que podrán adaptar la adscripción inicial prevista en la ley que autorice la creación de la entidad a la distribución de competencias que efectúen en cada momento.

- b) A la consellería o al órgano que sea competente por razón de la materia de acuerdo con lo que se determine en la norma de creación.
- c) Al órgano directivo de la Administración autonómica competente en materia de patrimonio, cuando la norma de creación no prevea adscripción expresa a otro órgano.
- d) A La Consellería competente en materia de patrimonio, cuando la norma de creación no prevea adscripción expresa a otro órgano.

186.- De acuerdo con la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia, con relación a la mutación demanial:

- a) La mutación de destino de bienes inmuebles y derechos reales propios de las entidades públicas instrumentales se acordará de oficio por la persona titular de la consejería competente en materia de patrimonio mediante orden, a propuesta conjunta de las entidades u órganos interesados.
- b) La mutación demanial de los bienes inmuebles y derechos reales de titularidad de la Administración general de la Comunidad Autónoma debe producirse mediante decreto del Consello de Xunta, a iniciativa propia o bien a petición de la Consellería interesada, previo informe de la Consellería a que estuvieren adscritos los bienes o derechos.
- c) Los bienes y derechos de la Administración Pública Autónoma no se podrán afectar a otros usos y servicios de competencia de otras administraciones públicas.
- d) La mutación no implica la alteración de la adscripción orgánica de los bienes o servicios, ni de su calificación jurídica.

187.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en atención a lo dispuesto en el artículo 89 del Real Decreto legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) Los funcionarios de carrera que se encuentren en situación de excedencia no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
- b) Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de dos años inmediatamente anteriores.



c) Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

d) Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración de tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

RESERVA SUPOSTO PRÁCTICO (texto 3)

188.- La Consellería, una vez adjudicado el contrato se plantea adquirir una nueva furgoneta. Cuál es el procedimiento que utilizará atendiendo a lo recogido en el artículo 301 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público:

a) El único procedimiento posible será realizar un expediente de modificación del contrato.

b) No podrá realizar un expediente de modificación del contrato por superar el 5% del precio del contrato.

c) Tendría que iniciar un procedimiento negociado sin publicidad.

d) No es necesario tramitar un expediente de modificación, si estaba establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y se acreditara la correspondiente financiación en el expediente originario del contrato.

189.- Sobre la transmisión de derechos del cobro que el contratista tiene derecho de acuerdo con lo establecido en el artículo 200 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público, indique la incorrecta:

a) Es requisito imprescindible la notificación fehaciente a la Administración del acuerdo de cesión.

b) Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de pago a nombre del contratista o del cedente surtirán efectos liberatorios.

c) Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración.

d) Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cedente.